

Panorama General

La puesta en marcha del Plan Europeo de Recuperación, casi un año después de su aprobación en el Consejo Europeo de julio de 2020, ha marcado la actualidad europea de este último mes.

El 31 de mayo finalizó el proceso de ratificación de la Decisión de Recursos Propios por los 27 Parlamentos nacionales, tras haber logrado la aprobación de, entre otras, las Cámaras finlandesa o polaca, donde la dificultad de los debates reveló la complejidad de transmitir con tiento y acierto el valor añadido que una acción colectiva europea basada en la coordinación eficaz de las acciones individuales supone tanto para los Estados miembros, como para la Unión Europea. Porque no se trata de un juego de suma cero, sino todo lo contrario; máxime en un entorno global que sigue tendiendo a la dinámica de bloques.

Quince días después, el 15 de junio, la Comisión Europea procedió con éxito a su primera salida a los mercados para captar un total de 20.000 millones de euros a través de un bono a diez años. Y, al día siguiente, el 16 de junio, la Comisión Europea dio luz verde al plan de recuperación, transformación y resiliencia de España, emitiendo una opinión favorable de su alcance y medidas. Una luz verde que se espera sea respaldada por el Consejo ECOFIN en su reunión de 13 de julio, lo que permitirá un primer desembolso correspondiente a la prefinanciación del 13% del total de la asignación acordada, 9.000 millones de euros.

Dado que los planes nacionales de recuperación han de alinearse con las directrices europeas de política económica, el 2 de junio la Comisión Europea publicó el paquete del Semestre Europeo de 2021 recordando que, aunque la retirada de estímulos ha de ser progresiva, es preciso prever una vuelta al equilibrio presupuestario. Una advertencia que anticipa el debate acerca de cómo reactivar las reglas fiscales de equilibrio presupuestario en 2023 y si han de ir acompañados de una hoja de ruta clara para la profundización de la Unión Económica y Monetaria, en particular la Unión Bancaria.

Como recordó BusinessEurope en su Consejo de Presidentes de 4 de junio, la utilización adecuada de fondos europeos es condición imprescindible para la reactivación de la actividad económica; al igual que lo es la implementación de fórmulas de colaboración público – privada para asegurar su llegada a la economía real en tiempo y en forma.

Además, la actualidad europea ha estado marcada por la intensidad de la agenda internacional, empezando por la Cumbre del G7 en Cornwall (Reino Unido) del 11 al 13 de junio, siguiendo con la Cumbre de la OTAN el 14 de junio y finalizando con la Cumbre UE – Estados Unidos en Bruselas al día siguiente, 15 de junio.

Si en la primera de dichas cumbres la conclusión más reseñable fue el acuerdo base sobre un impuesto mínimo de sociedades del 15%; en la segunda se analizaron los retos en materia de seguridad y defensa con las tensiones con Turquía y Rusia como telón de fondo; y en la tercera, la primera cumbre bilateral transatlántica desde la llegada a la presidencia de Estados Unidos del demócrata Joe Biden, ambas partes acordaron suspender durante un periodo de cinco años la aplicación de los aranceles derivados del conflicto Airbus-Boeing.

Por último, la agenda legislativa europea se ha centrado, por un lado, en la aprobación definitiva del Reglamento que introduce el certificado sanitario europeo digital, que estará operativo en toda la UE a partir del 1 de julio y cuya implantación con éxito es crucial a medida que progresa la vacunación a buen ritmo. Y, por otro, en el avance en la tramitación legislativa de dos de las iniciativas de mayor calado: las propuestas de Reglamentos sobre mercados y servicios digitales, entre otras. Una tramitación para cuyo mejor seguimiento el informe CEOEuropa incluye una nueva sección, denominada Observatorio Legislativo de la UE, dedicada en esta primera ocasión a ambos proyectos legislativos.

Bruselas, 21 de junio de 2021